

«Declaración» de la cumbre sobre el diésel

Los ciudadanos y ciudadanas europeos viven todavía bajo el nocivo legado del Dieselgate. En la actualidad, todavía circulan por las carreteras de Europa más de 43 millones de automóviles y furgonetas diésel altamente contaminantes que son la principal causa de la mala calidad del aire de muchas ciudades europeas. De los 62.000 millones de euros en los que se calculan los costes sanitarios del transporte por carretera en Europa, 52.000 millones pueden atribuirse a la polución que provoca el diésel. A pesar de estas graves repercusiones para la salud pública, la protección del consumidor y el medio ambiente, los esfuerzos de los países por abordar este desafío han sido escasos y apenas se han tomado medidas conjuntas para toda Europa.

Las ciudades tienen el compromiso de proteger el aire limpio de sus ciudadanos y ciudadanas. Medidas como las prohibiciones de circulación de automóviles y las zonas de bajas emisiones seguirán aplicándose cuando sea necesario, junto con otras iniciativas como el fomento de los desplazamientos a pie, en bicicleta y los coches y viajes compartidos, la modernización de las flotas de transporte público y la inversión en transporte público para dar impulso a los intercambios modales. Los automóviles y las furgonetas son parte fundamental de la movilidad en las zonas urbanas, pero es sin duda esencial reducir las cifras de vehículos contaminantes para abordar el creciente problema de la polución del aire, el cambio climático, la contaminación acústica y las muertes prematuras.

Pero las medidas a escala de ciudad no son suficientes para asegurar un aire limpio para sus habitantes. Las principales ciudades europeas están listas para trabajar con la Unión Europea y los Estados miembros a la hora de abordar el legado del Dieselgate y lograr juntos un futuro en el que la movilidad sea inteligente, limpia, saludable y compartida.

Por todo ello, hacemos un llamamiento a la Unión Europea y a los Estados miembros para que:

- Se retiren los 43 millones de vehículos diésel contaminantes que todavía circulan por los Estados miembros como una prioridad política para Europa y se acuerden soluciones para imponer nuevos vehículos más limpios.
- Se coordine la retirada y la adaptación de los vehículos a escala europea. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a respirar aire limpio y resulta inaceptable que hasta la fecha solo se hayan adoptado medidas en un escaso número de Estados miembros. Deben tomarse medidas para evitar la venta y el uso de automóviles contaminantes que no hayan sido adaptados y que estén siendo exportados desde la Europa occidental a la Europa oriental.
- Se cree un fondo de aire limpio paneuropeo para las ciudades. Los fondos deberán destinarse a las ciudades y los habitantes que se hayan visto más afectados por los vehículos diésel contaminantes, mediante programas nacionales ya existentes, como el Fondo de Aire Limpio alemán para ciudades, por ejemplo. Además, el sector

debería realizar una aportación significativa que refleje su contribución al empeoramiento de la calidad del aire y a los costes sanitarios, que esté en línea con sus responsabilidades sociales corporativas.

- Se garantice que todos los vehículos adaptados por los fabricantes pasan unas pruebas independientes en condiciones reales para verificar su rendimiento en cuanto a emisiones. Todo esto debería ir acompañado con la utilización de nuevas tecnologías de monitorización, como la teleobservación.
- Se elaboren unos objetivos ambiciosos en cuanto a las emisiones de CO2 de los vehículos y se amplíe la reforma del reglamento de emisiones en condiciones reales de conducción a unas condiciones límite, dentro de un marco reforzado de pruebas periódicas.
- Se implementen impuestos y planes de incentivos nacionales que sean efectivos, así como financiación para la contratación pública de vehículos limpios y el despliegue de una infraestructura alternativa en materia de combustibles.